

Temas

- I. Discusión de objetivos del gobierno en renegociación de la deuda con el Club de París
- II. Akerlof y la importancia de los estudios de caso
- III. Solución de Pareto, solución de Ramsey y tercer mejor
- IV. ¿Gobierno benevolente o Leviatán?
- V. Downs y su enfoque político de la política económica
- VI. Schumpeter y una definición operativa de la democracia

I. Discusión de objetivos del gobierno en renegociación de la deuda con el Club de París

Discusión sobre nota José Crettaz, “Admiten que se ve limitada la inversión”, *La Nación*, 30.6.2010 <http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1280043>. Se discuten dos preguntas.

(i) ¿Qué tipo de objetivos puede sostener el gobierno en este caso?

Un objetivo explícito y declarado del gobierno es llegar a un acuerdo para facilitar el acceso al financiamiento, tanto por las necesidades macroeconómicas de liquidez como para estimular el crecimiento a largo plazo vía inversión en infraestructura y en energía.

Un objetivo implícito, que va en el mismo sentido que el anterior, es que un mejor acceso al financiamiento puede ayudar a proseguir con el “modelo”, ayudando a estimular el consumo para llegar bien a las elecciones del año que viene.

Pero estos dos objetivos entran en conflicto con un tercer objetivo, no rendir cuentas a nadie, no admitiendo el monitoreo del FMI, lo que limita la transparencia de los actos de gobierno. Esto lleva a un posible “trade-off” entre objetivos (hasta el momento, primó este otro objetivo por encima de cualquier otra consideración).

Respecto al monitoreo del FMI, somos uno de los miembros. Como comentaba alguien, es como si la Argentina fuera socia de un club, pero no puede usar la piletta porque no acepta hacerse la revisión médica.

(ii) ¿Encuentran una racionalidad en este proceder?

Puede justificarse intento de Argentina en que es posible recibir un mejor tratamiento para refinanciar la deuda en un momento de crisis global (aunque también están los que sostienen que el mejor momento para la Argentina fue el 2007, cuando no necesitaba financiamiento alguno). Si se logra un acuerdo, va a facilitar el financiamiento a tasas mucho menores para la Argentina.

Está por verse si es posible acceder a un acuerdo con el FMI sin permitir la supervisión del FMI. De todos modos, puede primar una racionalidad de corto plazo, que es el horizonte más importante para los gobiernos, ya que la supervivencia de cualquier gobierno entra en juego en cada elección, por lo que sucesos más lejanos naturalmente reciben una ponderación mucho menor. Es decir, los objetivos de crecimiento a más largo plazo, por más que aparezcan mucho en las declaraciones, tienen un peso mucho menor en las decisiones efectivas.

Y si no se accede a una dispensa respecto a esta supervisión, en tanto el gobierno de la Argentina tenga cierta holgura, no parece que el acceso al financiamiento a tasas más bajas prime sobre otros objetivos del gobierno con los que entran en conflicto.

Recapitulación

En resumen, los objetivos declarados por casi cualquier gobierno son benevolentes, pero hay objetivos no declarados, que pueden estar ligados al ciclo político o a las rentas por el control político. Esto lleva a pensar en una forma alternativa de modelar las decisiones de política económica. Eso es lo que hace la economía política, que a la par de un análisis normativo propone hacer un análisis positivo de qué es lo que los gobiernos efectivamente buscan. Es más, el análisis normativo debe ser hecho conciente de las

limitaciones que imponen las necesidades políticas de los gobiernos. Esto haremos en el curso.

Otra cosa. La racionalidad de las acciones del gobierno y del electorado siempre se pueden entender como “intencionalmente” racionales, es decir, son racionales en términos de cómo uno entiende que funciona el mundo y la economía. No vamos a entrar en este tema de qué modelo del mundo tienen los actores, pero la diferencia entre “modelo de realidad” y “realidad”, o de las diferentes aproximaciones a ella, puede ser un tema importante para entender los éxitos y fracasos de la política económica.

II. Akerlof y la importancia de los estudios de caso

Akerlof (2005) plantea una metáfora para distinguir diferentes enfoques sobre la metodología de la economía: así como hay jardines franceses que responden a un “orden preconcebido”, hay también jardines ingleses que buscan “adaptarse al terreno”. Ambos enfoques tienen su propia lógica [esta distinción de Akerlof resuena a la distinción de Hayek entre racionalistas constructivistas, que quieren reformar la sociedad a partir de sus modelos preconcebidos, y una visión más evolutiva de la sociedad, que respeta más las tradiciones y entiende que las soluciones a menudo se encuentran por prueba y error).

Akerlof considera que en economía vale la pena confiar en la intuición que el investigador tiene de un problema dado, para incorporarlo en el modelo. No sólo se puede aprender de las regularidades estadísticas de las poblaciones, sino de las particularidades de los estudios de casos (en el mismo sentido, Ronald Coase descrea de la economía del pizarrón y incentiva un conocimiento detallado de los temas sobre los que uno va a investigar, y para Elinor Ostrom es fundamental conocer la problemática real de un sector, más allá de las bases de datos maravillosas que uno pueda conseguir).

Akerlof no considera que sea un mérito buscar siempre al modelo más depurado posible. Por ejemplo, en contra de las ideas metodológicas de Friedman, Akerlof considera que en economía no es siempre una virtud usar el modelo de competencia perfecta, sino a veces son mejores enfoques más detallistas como el de la competencia monopolística. Es decir, puede ser importante analizar las peculiaridades de cada situación, sobre todo porque en economía no podemos darnos el lujo de descartar ningún

tipo de información (esto mismo hizo Akerlof con su modelo de los "lemons", al integrar la información asimétrica al análisis de los mercados por primera vez).

Este enfoque de Akerlof se puede aplicar a la economía política (de hecho, él mismo escribió un artículo sobre como cuestiones de identidad afectan a los votantes, lo que nos saca del marco de votantes con racionalidad puramente instrumental). En particular, la teoría de juegos hace posible un abordaje particular de cada problema, en cuanto a modelar en detalle como las instituciones cambian cada problema. Más allá de eso, no necesariamente hay que tratar con agentes plenamente racionales, en ciertas situaciones puede convenir usar variantes de racionalidad (o atención) limitada.

III. Solución de Pareto, solución de Ramsey y tercer mejor

A. McGuire y Olson: primer mejor y segundo mejor

McGuire y Olson (1996) plantean los impuestos y el gasto público óptimos con un planificador benevolente, considerando dos casos, impuestos de suma fija e impuestos sobre el ingreso.

Ellos consideran no una función de utilidad, sino un objetivo de tipo smithiano, maximizar el ingreso nacional. Cuando los impuestos son de suma fija (no distorsivos), el óptimo en McGuire y Olson (1996, p. 75) es maximizar el ingreso neto del bien público:

$$\text{Max } Y(G) - G \tag{1}$$

Este bien público es simplemente un bien intermedio que sirve para aumentar el producto nacional. La condición de primer orden es que se iguale el producto marginal del bien público a su costo marginal,

$$Y'(G) = 1. \tag{2}$$

El caso de impuestos de suma fija se corresponde a la solución de Pareto o primer mejor, cuando uno puede alcanzar el óptimo social a través del gasto público.

El caso de que el gasto se financie con impuestos sobre el ingreso lleva a distorsiones sobre la producción. Capturan esto con la función $r(t)Y$, por la que la producción efectiva $r(t)Y$ decrece a medida que aumentan los impuestos t , con $r(0)Y = Y$. Cuando los impuestos son proporcionales al ingreso, la maximización del bienestar lleva a maximizar el ingreso neto efectivo (ecuación 11, p. 81):

$$\text{Max}_G r(t)Y(G) - G, \quad \text{tal que } G = tr(t)Y(G) \quad (3)$$

La condición de primer orden para los gastos con impuestos distorsivos (ecuación 13 en la p. 82) es que:

$$r(t)Y'(G) + r'(t) \frac{dt}{dG} Y(G) - 1 = 0. \quad (4)$$

Se tiene por la restricción presupuestaria que

$$\frac{dt}{dG} = \frac{1 - tr(t)Y'(G)}{[r(t) + tr'(t)]Y(G)}. \quad (5)$$

Dado que la recaudación total está dada por $tr(t)Y(G)$ y nunca se van a querer fijar las tasas impositivas a un nivel que reduzca la recaudación total (sino, estaríamos a la derecha del máximo de la curva de Laffer y la recaudación aumentaría con una reducción de tasas), se tiene que $r(t) + tr'(t) > 0$, por lo que el denominador de la ecuación (5) es positivo; el numerador también es positivo, ya que el aumento de recaudación inducido por el aumento de gasto no va a ser mayor en el margen que el gasto adicional mismo. Es decir, en situaciones normales aumentar el gasto requiere aumentar los impuestos. Reemplazando esto en la ecuación (4) y simplificando, tenemos que

$$r(t)Y'(G) = \frac{r(t) - (1-t)r'(t)}{r(t)}. \quad (6)$$

Es decir, el producto marginal efectivo del gasto, $r(t)Y'(G)$, se tiene que igualar al sacrificio directo de recursos más el peso muerto adicional por los impuestos distorsivos, a saber, $1 - (1-t)r'(t)/r(t)$, que es estrictamente mayor a uno ya que $r'(t) < 0$. Esto se corresponde a la solución de Ramsey, cuando los impuestos llevan a un segundo mejor por las pérdidas de eficiencia debido a los efectos distorsivos de los impuestos sobre la producción.

En ambos casos (impuestos de suma fija e impuestos proporcionales al ingreso), todo lo recaudado por impuestos es gastado en el bien público intermedio.

B. Restricciones de credibilidad y conflictos políticos: tercer mejor

Persson y Tabellini (1990, capítulo 1), detallan la idea tradicional de la teoría de política macro, que es planteada como un estudio de las consecuencias de diferentes reglas de política: conociendo las consecuencias, uno puede elegir la regla óptima en función de sus objetivos. Hay implícita una visión del formulador de políticas ("policy-maker") como un agente pasivo que puede ser programado como un robot.

Sin embargo, el formulador de políticas es un agente (o colección de agentes) racionales que responden a incentivos y restricciones como el resto de la economía. Así que en el centro del análisis queda el proceso de formación de políticas. A nivel abstracto, es análisis de problema de principal-agente, donde los ciudadanos son principales y delegan la política económica a uno (o varios) agentes. El agente maximiza sus objetivos, sujeto a las restricciones que se le imponen. El problema normativo es cómo diseñar instituciones que maximicen el bienestar colectivo de los principales.

Desde un punto de vista positivo, se describe la conducta del formulador de políticas bajo diferentes esquemas de incentivos. Se puede llegar a un tercer mejor (que es peor que el segundo mejor de Ramsey) porque hay restricciones de incentivos de otros dos

tipos, las que se originan en conflictos políticos y las que se originan en conflictos económicos.

Como muchos conflictos económicos se generan por las expectativas, las llaman restricciones de credibilidad. Esto se origina en los trabajos de Kydland y Prescott en 1977 sobre “Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans” y de Calvo en 1978 sobre “On the time inconsistency of optimal policy in a monetary economy”. Incluso si el formulador de políticas tiene mismos objetivos que sociedad, puede surgir conflicto: plan óptimo formulado en t para $t+j$ difiere de plan óptimo cuando llega $t+j$. Puede surgir por ejemplo por problema de externalidad que sólo toma en cuenta decisor de políticas. Esto se produce por posibilidad de sorprender: depende de la secuencia ("timing"), si se elige política antes de que decida sector privado (regla) o si es al revés (discreción). Estos escenarios implican que el costo de cambiar una decisión de política sea muy alto, o alternativamente, que el costo de desviarse de una política preanunciada es chico (lo primero estaba implícito en temprana literatura de expectativas racionales). El régimen con compromiso ("commitment") se puede tomar como referencia de medida bienestar comparado con régimen discreción, donde requisito de credibilidad generalmente va a imponer una restricción vinculante a política de equilibrio que nos lleva a tercer mejor (dan ejemplo de política monetaria y otro de política fiscal).

El conflicto de intereses puede ser por diferencias de objetivos políticos entre ciudadanos y gobierno. Estos son restricciones políticas que llevan a tercer mejor [pero ya nos apartamos del modelo de gobierno benevolente]. Ejemplo de esto son elecciones democráticas: pueden llevar a que políticos presten más atención a como aparecen a ojos votantes (problemas de información que llevan a ciclos económicos). O pueden llevar a alternancia de gobiernos con diferentes objetivos, llevando a inestabilidad política. Los detalles de restricciones políticas van a depender de marco institucional específico. El lobby y protesta son menos importantes para política macro.

IV. ¿Gobierno benevolente o Leviatán?

El enfoque de economía del bienestar supone que hay un gobierno benevolente que maximiza el bienestar de los consumidores. El enfoque de economía política es que el

gobierno es un actor con sus propios objetivos que no coinciden necesariamente con los intereses de los ciudadanos.

En un extremo, la posición en ciertos modelos de economía política es que el gobierno no se interesa en absoluto por los ciudadanos, sólo se interesa en sus propios objetivos. Se convierte en un Leviatán, un monstruo mitológico dispuesto a alimentarse incluso a costa de los ciudadanos. Un caso intermedio es el gobierno que es un Leviatán moderado, es decir, que le interesa algo el bienestar de los ciudadanos. Distintos esquemas institucionales pueden llevar a diferentes incentivos para el gobernante, un punto central en Downs (1957, cap. 15).

A. Autocracia

Los extremos de gobierno benevolente y Leviatán aparecen modelados en McGuire y Olson (1996). El análisis de McGuire y Olson (1996) se extiende al caso de un gobierno no benevolente que busca usar el aparato de gobierno para su propio provecho, tal como se supone que hacen los agentes que actúan en la esfera privada. Es decir, parte de lo recaudado en impuestos no es usado para proveer el bien público intermedio, sino que es repartido como rentas entre los que controlan el poder.

A pesar de que gobierne un Leviatán, ellos encuentran que puede haber cierto alineamiento de intereses entre el gobierno y la población en general si hay un horizonte temporal lo suficientemente largo (tal que no le convenga al gobierno confiscar los bienes de la población). Consideran tanto el caso de una mayoría redistributiva como el de un autócrata, que en ambos casos maximizan el flujo de recursos netos que obtienen de estar en el gobierno.

Aún un autócrata completamente egoísta va a limitar su imposición y proveer bienes públicos, en lo que caracterizan como un “bandido estacionario”, en lugar de un “bandido errante” que quiere arrebatar todo lo que puede. Maximiza lo que recauda de impuestos, neto de la provisión de bienes públicos (ecuación 1 de la p. 76):

$$\text{Max}_{t,G} tr(t)Y(G) - G, \quad \text{tal que } G < tr(t)Y(G) \quad (7)$$

Hay una condición de primer orden para los impuestos y otra para la provisión del bien público (comparar con ecuaciones 2 y 7, pp. 76-77). En el caso de los gastos, se tiene que cumplir que:

$$tr(t)Y'(G) - 1 = 0. \quad (8)$$

En el caso de los impuestos (no dado en clase), en tanto la restricción no sea vinculante tenemos que

$$r(t)Y(G) + tr'(t)Y(G) = 0. \quad (9)$$

B. Mayorías redistributivas

Si el grupo que gobierna es una mayoría redistributiva, la función objetivo está dada por la suma de la parte del ingreso neto de impuestos que se genera en el mercado, $F(1-t)r(t)Y(G)$, y la parte que se origina usando el gobierno para redistribuir rentas a su favor, por lo recaudado en exceso sobre lo gastado en el bien público intermedio (ecuación 16 de la p. 85):

$$\text{Max}_{t,G} F(1-t)r(t)Y(G) + tr(t)Y(G) - G, \quad \text{tal que } G < tr(t)Y(G) \quad (10)$$

Hay una condición de primer orden para los impuestos y otra para la provisión del bien público (ver ecuaciones 17 y 18, pp. 85-86). En el caso de los gastos, se tiene que cumplir que:

$$[F(1-t)r(t) + tr(t)]Y'(G) - 1 = 0. \quad (11)$$

McGuire y Olson interpretan a $S = F(1-t) + t$ como la participación que la mayoría recibe (en el margen) en el ingreso total; en el caso del autócrata, que no genera ingresos

en el mercado, se tiene que $S = t$. Comparado con un autócrata, por (11) una mayoría redistributiva va a limitar aún más la imposición; además, por (11) va a proveer más bienes públicos (se supone que solo transferencias diferenciales se usan para favorecer al grupo gobernante, no impuestos diferenciales).

En el caso de los impuestos (no discutida en clase), en tanto la restricción presupuestaria no sea vinculante tenemos que

$$F[-r(t)Y(G) + (1-t)r'(t)Y(g)] + [r(t)Y(G) + tr'(t)Y(G)] = 0. \quad (12)$$

McGuire y Olson después siguen discutiendo qué pasa si el grupo que gobierna tiene un interés superabarcador (“superencompassing”) en la sociedad, caso en el cual puede terminar actuando igual que un gobierno benevolente una vez que la restricción de que el gasto no supere la recaudación se hace vinculante.

V. Downs y su enfoque político de la política económica

El libro de Downs (1957) se titula “Una teoría económica de la democracia”; lo es, en el sentido de que el supuesto crucial es que los votantes buscan maximizar su utilidad individual a través de sus acciones en el proceso político (este punto de vista ha sido puesto en revisión por la literatura más reciente).

Más fundamentalmente se puede ver como el punto de arranque de la moderna economía política, ya que encuadra la elección de políticas económicas dentro de un sistema político, en particular en una democracia. Se resaltan algunos puntos clave del enfoque.

A. Introducción (capítulo 1)

No se busca usar una función de bienestar social, ya que los pesos son subjetivos y dependen del analista. Una solución alternativa está dada por el método de la democracia: una persona, un voto (puede quedar el problema de Arrow de intransitividad al que puede llevar votación).

B. Motivación partidaria y rol del gobierno (capítulo 2)

Redefine un partido político como un equipo con fines comunes, como si fuera un agente único (lo mismo se hace con supuesto de empresa que maximiza beneficios). Hipótesis fundamental: partidos formulan políticas para ganar elecciones, en lugar de ganar elecciones para formular políticas. Esta es la célebre definición de Downs de partidos oportunistas o pragmáticos, en contraposición a partidos programáticos o ideológicos.

C. Lógica básica del voto (capítulo 3)

El diferencial partidario entre dos partidos A y B está dado por $E(U_{t+1}^A) - E(U_{t+1}^B)$, por lo que Downs caracteriza la decisión de voto como una decisión prospectiva. Además, el votante no compara plataformas, sino qué harían partidos. A los efectos prácticos, considera que este diferencial está basado en el diferencial presente, $U_t^A - E(U_t^B)$, modificado por la tendencia. La elección se puede ver en lo esencial como una señal del votante de cambio (votar a la oposición) o no cambio (votar al oficialismo).

D. Ideologías partidarias como medio a votos (capítulo 8)

Este es el capítulo más conocido del libro. Comienza refiriéndose a Hotelling (1929) y una línea izquierda-derecha respecto de preferencias sobre el grado de intervención en la economía para caracterizar al electorado (heterogeneidad en una dimensión). Supone preferencias de un solo tope (si fueran simétricas, es el caso especial de las preferencias espaciales de Hotelling).

Hotelling supone una distribución uniforme votantes y muestra convergencia a mediano, que es el resultado clásico del modelo espacial. Smithies (1941) plantea que si se pierden extremos al ir al centro, puede impedir convergencia completa (pero Downs no discute esto en detalle); Downs agrega que con distribución normal convergen los partidos, ya que hay pocos en los extremos. Sin embargo, dice Downs que si distribución es bimodal los partidos se mantienen alejados; esto requiere incertidumbre, con votantes

que pueden abstenerse con diferencias chicas entre partidos (esto requiere lo que literatura posterior llama voto probabilístico, a diferencia del modelo espacial básico donde la identidad del votante mediano es conocida con certidumbre).

Considera que el determinante básico de las políticas es la distribución votantes. Da ejemplo de cambio de la distribución: Inglaterra con competencia entre liberales y conservadores antes de 1900; cuando se da voto a la clase obrera, los laboristas entran a la izquierda de los liberales, que son barridos, y los conservadores se corren un poco a la izquierda.

La estabilidad de políticas depende de que haya una gran masa de votantes en el medio. También importan instituciones para el equilibrio (por ejemplo sistema mayoritario, que se supone en versión básica de modelo espacial, o sistema proporcional).

E. Valor de información (capítulo 13)

La baja probabilidad de que el voto sea decisivo hace que el valor voto sea infinitesimal. En consecuencia, la decisión racional es no invertir en información política y la mayoría hace mínima inversión en información política (esto se conoce luego como el votante racionalmente desinformado). Es decir, la racionalidad individual entra en conflicto con la racionalidad colectiva: si bien la democracia funciona mejor con ciudadanos bien informados, es individualmente irracional hacerlo, por eso la democracia es imperfecta.

El gobierno opera en niebla incertidumbre, y presta atención a los deseos que percibe. Por eso los bien informados tienen fuerte influencia si hacen conocer su voz a gobierno. La información deriva valor de la influencia que da sobre proceso toma decisiones. Los frenos son descubrir qué le conviene y qué probabilidad de influencia tiene. Los influenciadores son especialistas, los votantes no. Por eso los productores tienen más influencia que los consumidores. Eso da un sesgo anticonsumidor, proproductor a las políticas públicas (por ejemplo, las tarifas proteccionistas).

F. Teoría de comportamiento del gobierno (capítulo 15)

La mayoría de los economistas (de la A de Aristóteles a la Z de Zeuthen) ven al gobierno como una agencia para maximizar el bienestar social. Eso implica que no se trata al gobierno como parte de la división del trabajo. Pero para frenar el monopolio, no se sugiere el fin del egoísmo, sino la institución de la competencia. La lógica tiene que ser la misma para el sector público.

La razón del equívoco es suponer que el gobierno aplica la voluntad pueblo. Eso supone agentes perfectos (más problemático aún que en corporaciones modernas por escala). Si el gobierno maximiza el bienestar social, no importa si el gobierno es democrático, totalitario o aristocrático. Pero si el gobierno es hecho por hombres con motivos privados, la estructura institucional es clave para determinar su funcionamiento.

VI. Schumpeter y una definición operativa de la democracia

Schumpeter (1942) contrapone lo que llama la doctrina clásica de la democracia (capítulo 21) con su propia definición (capítulo 22).

Definición clásica: la doctrina clásica de la democracia es que el método democrático es el arreglo institucional para que el pueblo decida vía sus representantes para el bien común.

Definición alternativa: otra teoría de la democracia es que el método democrático es el arreglo institucional por el que los individuos compiten por el poder buscando voto popular.

Respecto a la definición clásica, Schumpeter se pregunta: ¿bien común para quién? La respuesta no es obvia. Si se usa un criterio como el máximo bienestar utilitarista, no da respuestas concretas de qué hacer. Luego dice que aunque haya una opinión pública del conjunto de individuos, no tiene coherencia. Además, la voluntad del individuo en temas políticos no es clara, y ante todo tendría que existir primero.

Así como los consumidores son susceptibles a la propaganda cuando no son bienes cotidianos o bienes que conocen por su especialización profesional, lo mismo pasa en política, sobre todo en el arena nacional e internacional donde hay una pérdida realidad y responsabilidad, lo que hace a los votantes más manipulables para crear una voluntad.

Con su propia definición, Schumpeter da un criterio operativo de cuando hay democracia: es competencia libre por el voto libre [es un criterio de contestabilidad del poder, lo que se opone al monopolio del poder por un partido único, como hizo por ejemplo el PC en las democracias populares de Europa del Este, o el PRI antes en México].

Su definición de democracia no supone que el pueblo tenga opinión ni que los representantes la lleven a cabo. El rol de las elecciones es producir gobierno, donde el gobierno representa la voluntad de una mayoría, no la voluntad del pueblo. Por eso entiende Schumpeter que no hay nada sagrado en el principio democrático de las mayorías; de lo contrario se podría usar la identificación de la mayoría con el pueblo en forma autoritaria para oprimir las minorías.

El voto legislativo lo interpreta como un voto de apoyo u oposición al gobierno: la legislatura actúa como producto de la competencia por el poder, donde lo que importan no son los principios sino ganar (esto lleva a que muchos partidos tengan plataformas similares).

Referencias

Akerlof, George (2005), *Explorations in pragmatic economics*, New York, NY, Oxford University Press, Introducción.

Downs, Anthony (1957), *An economic theory of democracy*, Boston, MA, Addison-Wesley Publishing Co.

Hotelling, Harold (1929), “Stability in competition”, *Economic Journal* 39: 41-57.

McGuire, Martin C., y Mancur Olson (1996), “The economics of autocracy and majority rule: The invisible hand and the use of force”, *Journal of Economic Behavior* 34: 72-96.

Persson, Torsten, y Guido Tabellini (1990), *Macroeconomic Policy, Credibility and Politics*, London, Harwood Academic Publishers.

Schumpeter, Joseph A. (1942), *Capitalism, socialism and democracy*, 1ª edición, New York, NY, Harper and Row, caps. 21 y 22.

Smithies, Arthur (1941), "Optimum location in spatial competition", *Journal of Political Economy*. 49: 423-439.